



República de Colombia



Sala Quinta de Decisión Laboral

**LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE**  
**Magistrada Ponente**

**REFERENCIA:** PROCESO ORDINARIO LABORAL - AUTO  
**RADICACIÓN.** 05 308 31 03 001 2022 00074 01  
**DEMANDANTES:** DIANA PATRICIA ESPINOSA, JUAN DIEGO CHAVARRÍA ESPINOSA, JONATHAN CHAVARRÍA ESPINOSA, VANESSA CHAVARRÍA ESPINOSA Y KEVIN ALEJANDRO CHAVARRÍA ESPINOSA  
**DEMANDADA:** DOLORES RENDÓN DE OCHOA

Medellín, treinta (30) de enero de dos mil veinticuatro (2024).

En la fecha, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 2213 de 2022, se reunió la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los Magistrados **SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE**, quien actúa como ponente, con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, respecto del auto proferido dentro de la audiencia celebrada el 21 de junio de 2023, por el Juzgado Civil con conocimiento en procesos Laborales del Circuito de Girardota, que declaró no probadas las excepciones previas propuestas.

**I. ANTECEDENTES**

Pretenden los demandantes se declare la existencia de un contrato laboral entre el señor Héctor Argiro Chavarría Patiño (QEPD) y su empleadora señora Dolores Rendón de Ochoa; en consecuencia, que ésta última debe pagar a la sucesión del trabajador las cesantías, intereses a las mismas, multa por el no pago de los intereses, vacaciones y prima de servicios, por todo el tiempo laborado, indemnización total y ordinaria de perjuicios por accidente de trabajo, indexación de las prestaciones sociales, indemnización moratoria del artículo 65 del CST, gastos hospitalarios e exequiales ocasionados por el accidente de trabajo; costas y agencias en derecho (pág. 3 arch. 01, C01).

Como fundamento relevante de sus pretensiones, expuso que el señor Héctor Argiro Chavarría Patiño (QEPD) celebró contrato verbal con la señora Dolores Rendón de Ochoa desde el 25 de noviembre de 2017 hasta el 20 de abril de 2019, fecha de su fallecimiento el cual acaeció con ocasión de un accidente de trabajo y culpa patronal, en la finca denominada “Villa Liliana”, y que devengó un salario mensual de \$900.000 sin auxilio de transporte; que el fenecido contrajo matrimonio con la señora Diana Patricia Espinosa el 4 de febrero de 1994, y que de dicha relación procrearon 4 hijos de nombres Juan Diego, Jonathan, Vanessa y Kevin Alejandro Chavarría Espinosa, todos en la actualidad mayores de edad (págs. 03 a 04 arch. 01, C01).

## II.CONTESTACIÓN – EXCEPCIONES PREVIAS

Una vez la parte demandada fue notificada del contenido de la demanda, presentó contestación a la misma y propuso las excepciones previas que denominó **Incapacidad o indebida representación del demandante**, ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales y no haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea, y en general de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado cuando a ello hubiere lugar.

Argumentó frente a la primera excepción, que en el cuerpo del poder se consignó la expresión de voluntad de sus otorgantes de demandar en su representación y no en representación de la sucesión, cuando expresan sus otorgantes “para que en nuestra representación demande”, por lo que al demandar el abogado en nombre de la sucesión y no en representación de sus otorgantes como fue conferido el poder, se configuró la indebida representación del demandante; toda vez que, no es lo mismo actuar en representación de la sucesión, en nombre de quien dice el abogado actuar, que en representación de quienes otorgaron el poder así conferido y en cuyo caso no hay razón para pedir condena a favor de la sucesión.

Lo anterior deja ver que el abogado actuó con falta absoluta de poder para demandar en nombre de la sucesión y para la sucesión, los otorgantes del poder lo confirieron “*para que en nuestra representación demande en proceso ordinario laboral de primera instancia a la señora Dolores Rendón de Ochoa*”, en calidad de cónyuge e hijos del señor Héctor Argiro Chavarría Patiño y no de herederos, siendo indebida la representación del demandante (págs. 13 a 14 *ibídem*).

### III.AUTO.

En audiencia celebrada el día 21 de junio de 2023, el Juzgado de conocimiento declaró no probadas las excepciones previas propuestas, y condenó en costas a la demandada y a favor de los demandantes.

Sustentó su decisión al afirmar que, de la lectura del poder y de una interpretación del escrito demandatorio, no le asiste razón a la demandada, pues la representación de la sucesión se encuentra en cabeza de los posibles herederos y son ellos los llamados a otorgar poder para demandar, como ocurrió en el presente caso que podían ser todos, uno o alguno, cuando en el escrito de la demanda y en el poder se señala que el poder se otorga en calidad de cónyuge e hijos del señor Héctor Argiro Chavarría Patiño, es decir de sus posibles herederos (arch. 20 C01).

### IV.RECURSOS DE APELACIÓN

**Parte demandada** manifiesta que no le asiste razón al *a quo*, pues olvida que cuando se pretende la indemnización por la ocurrencia de un hecho, se puede pedir a nombre propio, para la sucesión o para ambos, y en este caso el poder que se otorgó dice claramente “*actuando como cónyuge e hijos*” no como herederos y “*para que en nuestra representación demande en proceso ordinario*” siendo claro que el poder se concedió como personas naturales y no como herederos que fue lo determinado por la *a quo*. En otras palabras, el poder fue otorgado por los hijos y la cónyuge del señor fenecido y no como herederos, por lo cual no puede el apoderado presentar demanda cuando el poder a él reconocido es sustancialmente diferente, es decir, no puede demandar en nombre de la sucesión ni para la sucesión.

De igual forma presenta su desacuerdo con la condena en costas, dado que el actuar de la demandada siempre lo ha sido de buena fe, sin que sea procedente efectuar una condena netamente objetiva.

### V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Recibidas las diligencias en esta Corporación, mediante auto del 17 de agosto de 2023 se admitió el recurso impetrado, y, conforme a lo normado en el

art. 13 de la Ley 2213 de 2022, se dispuso correr el respectivo traslado a las partes para alegar (arch. 2 C02), sin que ninguna de las partes realizara pronunciamiento alguno.

VI. CONSIDERACIONES

El num. 3º del art. 65 del CPTSS, modificado por el art. 29 de la Ley 712 de 2001, dispone la procedencia del recurso de apelación respecto del auto que resuelva las excepciones previas, de manera que, tiene esta Sala competencia para resolver el recurso interpuesto por la demandada, teniendo en cuenta para ello lo previsto en el art. 66A ídem, correspondiéndole verificar la procedencia o no de la excepción previa propuesta.

Al respecto, el artículo 74 del CGP señalan que *“Los poderes generales para toda clase de procesos solo podrán conferirse por escritura pública. El poder especial para uno o varios procesos podrá conferirse por documento privado. En los poderes especiales los asuntos deberán estar determinados y claramente identificados”*; y de manera complementaria, se precisa que el artículo 25 del CPT establece que la demanda debe contener *“6. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado”* y *“7. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, clasificados y enumerados”*.

En este asunto, en la demanda se reclaman o pretenden acreencias laborales e indemnizaciones para la sucesión, y el poder presentado al interior del proceso, reza:

Asunto: PODER

Nosotros, DIANA PATRICIA ESPINOSA, JUAN DIEGO CHAVARRÍA ESPINOSA, JHONATAN CHAVARRÍA ESPINOSA, VANESSA CHAVARRÍA ESPINOSA, KEVIN ALEJANDRO CHAVARRÍA ESPINOSA mayores de edad, domiciliados y residentes en Barbosa - Antioquia, la primera actuando como cónyuge supérstite y los otros como hijos de HÉCTOR ARGIRO CHAVARRÍA PATIÑO, identificados como aparece al pie de nuestras firmas, por medio del presente escrito otorgamos poder especial, amplio y suficiente al jurista GUSTAVO ADOLFO RUIZ OSPINA, abogado con tarjeta profesional No.172.667, para que en nuestra representación demande en proceso ordinario laboral de primera instancia a la señora DOLORES RENDÓN DE OCHOA propietaria de la finca VILLA LILIANA, para que sea condenada a pagar a la sucesión de HÉCTOR ARGIRO CHAVARRÍA PATIÑO, nuestro esposo y padre, los siguientes conceptos de orden laboral:

Considera la Sala fundamental precisar, como lo afirma la apelante, que una cosa es la potestad de reclamar para sí y otra, para la masa sucesoral los

derechos herenciales; así lo indicó la CSJ en sentencia SC4888-2021, Rad. 25183-31-03-001-2010-00247-01 del 03 de noviembre de 2021, al señalar:

Uno de los efectos que se generan ante la conformación de dicha universalidad patrimonial, es que durante la indivisión podrán los herederos promover las acciones que hubiera podido adelantar el *de cujus* para la protección de su peculio, entre las cuales está la de emprender o enfrentar «*las mismas acciones posesorias que tendría y a que estaría sujeto su autor, si viviese*» (art. 975 C.C.), más puntualmente se les autoriza para promover la «*reivindicatoria sobre cosas hereditarias reivindicables que hayan pasado a terceros y no hayan sido prescritas por ellos*» (art. 1325 C.C.).

No puede olvidarse, que el derecho a reivindicar que le confiere al heredero el artículo 1325 del Código Civil se puede ejercer por estos a nombre propio o para la herencia, dependiendo si se ha efectuado o no la partición de la masa herencial, toda vez que en el primer evento este asume la posición de su causante, mientras que en el segundo reclama un derecho propio, habida cuenta que con ocasión de ésta se radica en él el dominio de los bienes que le hubieran correspondido y que estén en manos de terceros.

En cuando a la forma en que los herederos pueden ejercer dicha facultad, atendiendo que durante la indivisión los herederos son titulares sólo de derechos herenciales, cuando actúan por activa podrán acudir conjuntamente como demandantes a reclamar la cosa común, o bien podrá cualquiera de ellos accionar individualmente, en cuyo caso la reclamación se hará para la comunidad herencial, como bien lo ratificó esta Corte en sentencia SC de 5 de agosto 2002, rad. 6093 al decir, que [...]

Quiere decir ello, que no habrá legitimación en la causa por activa por parte del heredero que pretenda reivindicar para sí el dominio 'pleno y absoluto' de bienes relictos, mientras la comunidad herencial permanezca indivisa, al ser ésta la verdadera titular del derecho, y para quien deberá demandarse, so pena que su reclamación devenga infértil.

Conforme a lo expuesto, para acceder al derecho los herederos pueden optar directamente por reclamar del deudor el derecho que le correspondía al difunto, pero no para sí, sino para la masa herencial.

Verificado el contenido tanto del poder como de la demanda, observa la Sala que se cumplen los requisitos de ley, y es que si bien el poder no admite interpretación, precisamente no hay lugar a hacerla en este evento, pues es claro en su mandato al profesional del derecho, al identificar el proceso que se convoca, la autoridad a la que va dirigido, la determinación de sus poderdantes, la calidad con la que actúan y las pretensiones perseguidas; y aunque en el encabezado y en el postulado de la demanda se presenta confusión respecto a la calidad en la que actúa el apoderado, ello se supera al verificar las pretensiones, pues estas son coincidentes con el poder otorgado a su apoderado; y, entender lo contrario, para esta Sala constituiría un exceso de ritual manifiesto, por cuanto el funcionario judicial no puede por un apego extremo o aplicación mecánica de las formas, renunciar conscientemente a la verdad jurídica objetiva patente en los hechos, derivándose de su actuar una inaplicación de la justicia material y del

principio de la prevalencia del derecho sustancial<sup>1</sup> olvidando lo claramente ordenado en el artículo 11 del estatuto procesal general que a la letra dispone:

“INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES. Al interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente código deberán aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales. El juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias.”

Y es que corresponde a los juzgadores de instancia como directores del proceso, ante lo oscuro o impreciso, interpretar la demanda a través de los distintos métodos posibles, para determinar cuál es el verdadero querer de las partes. Al respecto la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha señalado:

“Es verdad que tanto en el artículo 25, como en el 25 A del C.P.T. y S.S se regula lo relativo a la demanda y allí se indica que corresponde referir el cimiento jurídico, los hechos y omisiones que sirven de fundamento a las pretensiones, que deben ser “expresadas con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado”, y en lo relacionado con su acumulación se fijan como reglas principales que exista competencia del juzgador para resolverlas, que no sean excluyentes “salvo que se propongan como principales y subsidiarias” y que puedan tramitarse por el mismo procedimiento; todo ello debe verlo el juez en su contexto, y no de manera desconectada, a efectos de poder desentrañar, ante la eventual vaguedad, el querer del demandante, con el fin de evitar una nulidad o, como en este caso, una decisión meramente formal con grave detrimento de las partes, como ya se dijo.

De ese modo corresponde al juzgador, a través de la lógica jurídica, determinar el sentido de las aspiraciones, y advertir, bajo ese norte, que aunque pueda existir contradicción en lo pedido, alguna de las pretensiones debe ser la válida, ya sea porque existió mayor énfasis en su argumentación, o porque la ubicación del texto permite argüir que se planteó como principal, o subsidiaria, aunque no lo haya puesto en un acápite específico, siendo el último camino, como ya se ha insistido, el de la inhibición. (CSJ SL580-2013, 21 agosto 2013, rad. 43604, reiterada en sentencia SL9318-2016, 22 junio de 2016, rad. 45931).

Conforme a lo anterior, y verificada la demanda, no se evidencia que adolezca de las formalidades exigidas por los numerales 6º y 7º del artículo antes transcrito, pues claramente en el acápite denominado “pretensiones” las mismas se indicaron con precisión y claridad, y que sus condenas lo son para la masa sucesoral; igualmente, se aprecia que los supuestos fácticos que sirvieron de fundamento a tales súplicas fueron debidamente clasificados y enumerados, atendiendo a que el juzgado de conocimiento inicial, admitió la demanda correctamente.

Luego, contrario a lo afirmado por el recurrente, no se avizora en este evento la prosperidad de la excepción previa propuesta, pues el poder y la

<sup>1</sup> Sentencia T-264-2009 reiterada en providencia T-234-17.

demanda cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 25 del CPTSS, y es que además lo que podría hacer inepta una demanda, es la imposibilidad o dificultad insalvable para descubrir lo que el accionante implora, situación que en este evento no se configura, siendo perfectamente viable resolver de fondo la controversia, y más cuando el poder judicial fue otorgado para representar a los demandantes en búsqueda de una condena para la masa sucesoral, como bien lo dedujo la *a quo*, y es que se reitera, el funcionario judicial en eventos como el aquí examinado debe dar prevalencia al derecho sustancial del asociado que acude a la jurisdicción sobre los rigorismos de orden procedimental que puedan imponerse en desmedro de los derechos superiores, máxime que en los términos del artículo 48 del CPTSS, el juez asumirá la dirección del proceso adoptando las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes, la agilidad y rapidez en su trámite. Por las razones anteriores se confirmará la decisión de instancia.

Finalmente, frente a la inconformidad presentada por la condena en costas impetrada en primera instancia, es imperioso resaltar el contenido del artículo 365 del CGP el cual señala:

“En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.

**Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable** un incidente, **la formulación de excepciones previas**, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.

Así las cosas, encuentra la Sala que la condena impuesta por concepto de costas procesales se encuentra regida por un criterio objetivo, sin que en principio la buena o la mala fe de las partes al interior del proceso, influya en su imposición. Razón suficiente para confirmar la decisión.

En ese sentido, se impondrán también costas en la alzada a favor de la parte demandante y a cargo de la demandada, al no prosperar el recurso. Se fija como agencias en derecho a su cargo el equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente para esta anualidad, que deberá incluirse en la liquidación respectiva.

En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN,**

administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

**RESUELVE:**

**PRIMERO: CONFIRMAR** el auto proferido el 21 de junio de 2023, por el Juzgado Civil con Conocimiento en Procesos Laborales del Circuito de Girardota, según lo expuesto en las consideraciones anteriores.

**SEGUNDO:** Costas en la alzada a cargo de la parte demandada, como se indicó en la parte motiva.

**TERCERO:** Lo resuelto se notifica en **ESTADOS** electrónicos y se ordena devolver el proceso al Despacho de origen.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE**

Magistrada ponente



**SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE**

Magistrada



**DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN**

Magistrado

(\*) Hipervínculo de consulta de expediente digitalizado:

[https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f/g/personal/des17sltsmed\\_cendoj\\_ramajudicial\\_gov\\_co/EuBSPbfvt\\_5Btw3CIX-oX0ABL\\_Ahu5u0jfwojyxd-lbAsw?e=uYgtzN](https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f/g/personal/des17sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/EuBSPbfvt_5Btw3CIX-oX0ABL_Ahu5u0jfwojyxd-lbAsw?e=uYgtzN)

Firmado Por:



**Luz Patricia Quintero Calle**  
**Magistrada**  
**Sala 017 Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **501a90097263494839f4e2ac5c42e8c99e731f604a1ac4f88c1e1f8de6105f34**

Documento generado en 30/01/2024 01:37:21 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**